



Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

22.908/2025.-

"VAICKERS S.A. (TF 34044-I) c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO".

///nos Aires, 22 de diciembre de 2025.- AMD

Y VISTOS, CONSIDERANDO:

I.- Que, por medio del pronunciamiento del 6/05/24, la Sala "B" del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por mayoría, revocar parcialmente las Resoluciones N.º 71/10 (DV CRRÍ); 72/10 (DV CRRÍ) y 51/13 (DV CRRÍ) en cuanto determinaban impuestos, intereses y "en su caso" multas, en lo conectado con el ajuste realizado con fundamento en el artículo 2 de la ley 25.345, con costas.

Por otra parte, confirmó las Resoluciones N.º 71/10 (DV CRRÍ) y 72/10 (DV CRRÍ) en cuanto determinaban impuestos e intereses (en los términos de los Considerandos VII; VII.1 y VII.2), con costas.

Asimismo, confirmó las multas aplicadas en las Resoluciones N.º 72/10 (DV CRRÍ); 51/13 (DV CRRÍ) y 06/16 (DV CRRÍ), reduciéndolas al mínimo legal previsto por el artículo 46 de la ley 11.683. Ello, con costas: "[s]alvo en la parte en que se reduce que se imponen por su orden [...]".

Finalmente, ordenó al Fisco Nacional que practicara una reliquidación de conformidad con los parámetros expuestos en la sentencia.

Para fundar su decisión, los integrantes del voto mayoritario reseñaron inicialmente los antecedentes del caso, las posiciones de las partes y la prueba rendida. Luego, detallaron las constancias del informe final de inspección y las impugnaciones realizadas respecto de los proveedores "Textil Monserrat S.A."; "Chabar Elías"; "Regia de Groisman Sofía y Alberto S.H."; "Innotex S.R.L."; "Valdivia Rubén Armando"; "Neck Tex S.R.L."; "Denimtex S.R.L."; "Intratex S.R.L."; "Prodart S.R.L." y "Rodres S.R.L." en el Impuesto al Valor Agregado.

Por otra parte, también detallaron el contenido sustancial de las impugnaciones realizadas en el Impuesto a las Ganancias (conectadas con la improcedencia de las deducciones realizadas en concepto de costo de ventas y/o gastos operativos y con la cancelación de operaciones celebradas con el contribuyente Park Jong Chui) y explicaron el motivo de las multas impuestas.

En ese contexto, en lo atinente a los ajustes practicados con fundamento en el artículo 2 de la ley 25.345, invocaron precedentes jurisprudenciales y recordaron, en lo sustancial, que la sola infracción a los deberes formales previstos en dicha norma no autorizaba, por sí misma, a desconocer el cómputo





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

de créditos fiscales o deducciones cuando la existencia de las operaciones ha sido admitida por el propio Fisco.

Ponderaron, en particular, que en el caso la administración había reconocido la realidad de las operaciones celebradas con el contribuyente Park Jong Chui y que, en esas condiciones, el ajuste sustentado exclusivamente en la falta de utilización de los medios de pago previstos en la referida disposición carecía de sustento. Sobre esa base, concluyeron que correspondía dejar sin efecto las determinaciones e imposiciones de multa en cuanto se vinculaban con dicho aspecto, ordenando la consiguiente reliquidación.

A continuación, se avocaron al tratamiento de las restantes impugnaciones, vinculadas con la supuesta inexistencia o falta de acreditación de las operaciones documentadas con los proveedores mencionados en el considerando precedente y, luego de reseñar algunos elementos emergentes de las actuaciones administrativas, destacaron que recaía sobre la contribuyente la carga de demostrar la efectiva realización de las operaciones invocadas y la veracidad de la facturación utilizada, tanto a los fines del Impuesto al Valor Agregado como del Impuesto a las Ganancias.

En ese sentido, ponderaron la prueba reunida por el organismo recaudador (informes de verificación, constancias registrales, manifestaciones de terceros, datos bancarios y comerciales, entre otros) y consideraron que de ella surgía un cuadro de serios reparos en torno a la realidad de las transacciones, frente al cual la contribuyente sólo había opuesto elementos de carácter predominantemente formal (registro contable, facturación y asientos internos), insuficientes para desvirtuar las conclusiones del Fisco.

Con apoyo en esa valoración probatoria, puntualizaron que no se había demostrado que los sujetos consignados en los comprobantes fueran los verdaderos prestadores ni que los bienes hubieran sido efectivamente recibidos y utilizados en la actividad, razón por la cual entendió procedente mantener los ajustes practicados en ambos tributos, sin perjuicio del cómputo del costo presunto admitido en sede administrativa.

En lo atinente a los intereses resarcitorios, sostuvieron que su procedencia constituía una consecuencia necesaria de la confirmación, aun parcial, de las obligaciones tributarias determinadas, en tanto tales accesorios tienen carácter indemnizatorio y se encuentran destinados a resarcir la mora en que incurre el contribuyente en el cumplimiento de sus deberes de ingreso.

En consecuencia, concluyeron que correspondía mantenerlos respecto de los importes de impuestos que resultaban confirmados por el pronunciamiento.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

En cuanto al planteo de prescripción articulado por la contribuyente, (respecto de la multa aplicada mediante la Resolución N.º 51/2013, referida al Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 01, 02, 07 y 12/2004), recordaron el régimen general de prescripción de la ley 11.683 y refirieron a los artículos 56, 58 y 68 de dicho cuerpo normativo, así como las reglas especiales de suspensión introducidas por la ley 26.476 y por el inciso d) del artículo 65 de la misma ley 11.683, en relación con la tramitación de la causa penal iniciada por los mismos hechos.

Sobre la base del cómputo de los plazos y de las causales de suspensión e interrupción que tuvieron por configuradas (en particular, la vigencia de la ley 26.476 y la radicación y posterior trámite de la denuncia penal), concluyeron que, al momento del dictado de la resolución sancionatoria, los poderes del Fisco para aplicar la multa no se encontraban extinguidos por el transcurso del tiempo, por lo que rechazaron la defensa de prescripción.

Finalmente, en punto a la graduación de las sanciones aplicadas, atendiendo a la naturaleza de las infracciones reprochadas, a la cuantía de los tributos supuestamente omitidos, al comportamiento desplegado por la contribuyente y a las circunstancias particulares del caso, juzgaron excesivo el *quantum* de las multas fijadas en sede administrativa.

Por tal motivo, y sin desconocer la procedencia de la reprochabilidad, decidieron reducirlas al mínimo legal previsto en la ley 11.683, manteniendo su tipificación y confirmando, en lo sustancial, la imposición de las sanciones en los términos en que quedaron delimitadas por la decisión (páginas 292/310 del archivo [PDF N.º 3 acompañado en la causa](#)).

II.- Que, disconforme con lo resuelto, apeló la parte actora, quien fundó su recurso el 26/07/24 y cuyo traslado fue contestado el 15/04/25 (páginas 316; 340/367 y 415/437 del archivo [PDF N.º 3 acompañado en la causa](#)).

La actora sostuvo, en lo sustancial: (i) que el Tribunal Fiscal confirmó indebidamente las impugnaciones del crédito fiscal en el I.V.A. y de las deducciones en el Impuesto a las Ganancias vinculadas con las operaciones realizadas con los proveedores observados, pese a que -a su entender- se acreditó una correlación razonable entre las compras y las ventas, una contabilidad adecuada, la efectiva realización de las operaciones y la diligencia en operar con sujetos inscriptos y con facturas válidas (con C.A.I.), trasladando en los hechos a su parte las irregularidades contables o registrales imputables exclusivamente a terceros, sin valorar adecuadamente la prueba producida ni las





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

constancias que demostrarían la real capacidad económica y operativa de la empresa y de sus clientes públicos;

(ii) que resultaba erróneo el rechazo de la excepción de prescripción opuesta contra la multa aplicada mediante la Resolución N.º 51/2013, por cuanto -según alegó- no se configuraron válidamente las causales de suspensión e interrupción previstas en los artículos 65 y 68 de la ley 11.683 y, en particular, se efectuó una aplicación retroactiva y más gravosa del inciso d) del artículo 65 y del artículo 44 de la ley 26.476, en violación del principio de legalidad y de la garantía de irretroactividad de la ley penal más gravosa, citando para ello los artículos 56 y 58 de la ley 11.683 y doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y

(iii) que la confirmación de las multas por defraudación fiscal carece de sustento, desde que ni la A.F.I.P. ni el Tribunal Fiscal habrían demostrado la existencia de maniobras ardidasas o engañosas ni el elemento subjetivo requerido por el artículo 46 de la ley 11.683, basándose exclusivamente en presunciones propias del ámbito determinativo, lo que -a su criterio- vulnera la presunción de inocencia y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que exige prueba directa de la conducta dolosa para la procedencia de sanciones de esa naturaleza.

III.- Que, por su parte, apeló el Fisco Nacional. Sin embargo, el 10/09/2024 desistió de su impugnación (ver fs. 377/380 del [PDF N.º 3 acompañado en la causa](#)).

IV.- Que, el 13/12/2024, el Tribunal Fiscal reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. Esa regulación fue apelada por considerarse exigua (páginas 381/383; 396 y 400 del archivo [PDF N.º 3 acompañado en la causa](#)).

V.- Que, efectuada la reseña que antecede, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. *Fallos*: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros y esta Sala, *in re*, “Massuh S.A. c/D.G.I.”, expte. N.º 38.066/2011, del [17/11/2021](#) y “HSBC Argentina Holdings S.A. -TF 48911-I c/D.G.I.”, expte. N.º 19.801/2021, del [1/07/2022](#), pronunciamiento confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha [27/12/2024](#), entre muchos otros).

Y, además, tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que se estimen apropiadas para resolver





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

el conflicto (cfr. doc. *Fallos*: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 y esta Sala, *in re*, “Strazzolini, Ronaldo Emilio c/E.N. –A.F.I.P. –D.G.I.”, expte. N.º 71.973/2018, del [16/07/2021](#), y “EIDICO S.A. -TF 46884-I c/D.G.I.”, expte. N.º 22.019/2017, sentencia del [5/12/2022](#)).

VI.- Que, en estas condiciones, la cuestión central a resolver se encuentra en determinar si la valoración de los elementos probatorios que realizó el Tribunal Fiscal para revocar los ajustes realizados a través de las determinaciones del caso resulta arbitraria.

Así, cabe recordar la previsión contenida en el art. 86, inc. b), ap. 1º y 2º de la L.P.T., norma que exige a quien pretende la revisión en esta instancia de la plataforma fáctica y de la prueba que gira en torno a ella, acreditar la arbitrariedad en el pronunciamiento del Tribunal a quo, lo que habilitaría tal análisis por parte de esta Cámara.

Al respecto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquélla que caracteriza qué debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el ” (cfr. *Fallos*: 207:72 y doctrina concordante posterior; esta Sala, *in re*, “Sbasseiro, Oscar R. c/D.G.I.”, Expte. N.º 74.716/2018, del 3/04/2019, entre otros).

El criterio imperante en este Tribunal interpreta que de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la ley 11.683, respecto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, en la causa: “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, *in re*, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. N.º 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, en autos: “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, causa: “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, *in re*, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre otros).

De ello se deriva que, para que se admita la posibilidad de revisión y de una nueva valoración de la prueba producida por esta instancia, ello solo puede ocurrir cuando el apelante demuestre que la ponderación de los hechos y la prueba del Tribunal Fiscal ha sido arbitraria, o ha dejado de lado elementos relevantes para acreditar los hechos.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

VII.- Que, frente a los parámetros descriptos, es que debe ponerse de resalto que –a la luz del detalle de la prueba rendida en la causa, reseñada en el pronunciamiento apelado y que se encuentra acompañada digitalmente en estos actuados– la valoración que realizó el Tribunal Fiscal no resulta reprochable.

En efecto, si bien ciertas facturas acompañadas por la contribuyente cumplían en principio con los requisitos reglamentarios, de las verificaciones practicadas se constató que algunas de ellas presentaban Código de Autorización de Impresión (C.A.I.) vencido, y que los proveedores circularizados negaron haber mantenido vínculo comercial alguno con Vaickers S.A., aportando sus propios registros contables y facturación, en los cuales no figura la actora como cliente.

En tales condiciones, el Tribunal Fiscal concluyó que la objeción no podía reducirse a una irregularidad formal sino que radicaba en la inexistencia material de las operaciones invocadas. El fundamento del ajuste se asienta, por tanto, en la prueba producida durante la fiscalización –principalmente las respuestas de los proveedores y sus libros I.V.A. ventas–, de las cuales surge la falta de correspondencia entre las facturas acompañadas por la actora y la documentación emitida por los presuntos emisores en los mismos períodos fiscales.

Corresponde destacar a esta altura, que la actora no ha conseguido controvertir o cuanto menos desacreditar el valor probatorio de los elementos referidos, de los que resulta la inexistencia material de las operaciones cuestionadas por el Fisco; a lo que se añade que por su parte, el contribuyente tampoco ha aportado otros medios que permitieran tenerlas por debida y específicamente justificadas, sin que el argumento referido a la relación entre el volumen de lo supuestamente operado y lo vendido, tenga entidad alguna para probar la veracidad de las concretas adquisiciones sobre las cuales pretende fundar sus cuestionamientos.

De tal modo, y frente a las circunstancias descriptas, corresponde rechazar los agravios de la parte actora también en este aspecto pues, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de valoración de la prueba utilizada en el caso, dejándose a salvo que, el hecho de que el Tribunal Fiscal haya acordado preferencia a las probanzas generadas por la autoridad administrativa en la etapa de fiscalización respecto de los que invoca la recurrente, no configura arbitrariedad (cfr., en un sentido similar, *Fallos*: 273:205; 274:35; 276:311, entre otros).

En consecuencia, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado en este aspecto.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

VIII.- Que, para dar respuesta a los agravios relacionados con la prescripción de las facultades punitivas, respecto de la sanción aplicada en la Resolución N.º 51/2013, es necesario realizar las siguientes precisiones.

En lo relativo a la interrupción de la prescripción por la comisión de “nuevas infracciones”, conviene recordar que la interrupción del curso prescriptivo solo puede generarse una vez que se hubiera juzgado el hecho al que se le pretende asignar dicho efecto y en la medida en que se hubiera condenado al imputado, a través de una decisión administrativa o judicial firme (cfr. *Fallos*: 312:1351 y 322:717 y, en un sentido similar, Diez, F.J. y Ruetti, G.J. “*Procedimiento tributario. Ley 11.683 comentada*”, La ley, Bs. As., 2016, pág. 541 y Díaz Sieiro, H., Veljanovich, R.D. y Bergroth, L. “*Procedimiento tributario. Ley N.º 11.683*”, Ed. Macchi, Bs. As., 1993, págs. 433/434).

Es que, teniendo en cuenta el carácter penal de las sanciones tributarias (cfr. Callelo, C. “*La comisión de nuevas infracciones como causal de interrupción de la prescripción*”, Doctrina Tributaria Errepar, Tomo XXXVI, 2014, págs. 1/2), no es posible sino concluir que, la expresión “comisión de nuevas infracciones” contenida en inciso “a” del artículo 68 de la ley 11.683, debe entenderse en sentido técnico de una conducta posterior, típica, antijurídica y culpable (cfr. Sala I, *in re*, “CTI Norte Compañía de Teléfonos del Interior S.A.”, sentencia del 07/09/2023; “Sol Naciente Seguro de Personas S.A.”, sentencia del 14/09/2015; “Frigorífico La Colorada S.A. (TF 34654-I)”, sentencia del 20/08/2019 y “Tropini y Salcedo S.A.”, sentencia del 19/08/2021); y que, el requisito de firmeza del acto sancionatorio, se encuentra relacionado con la presunción de inocencia que rige en todo proceso de esta naturaleza (cfr. *Fallos*: 293:50) (cfr., en un sentido análogo, esta Sala, *in re*, “Mascardi, Alejandro Enrique (TF 35932-I) c/D.G.I.”, Expte. N.º 21265/2024, [sentencia](#) de 26/09/2025).

Por otra parte, en cuanto a la suspensión anual contenida en el artículo 44 de la ley 26.476, corresponde remitirse a lo resuelto por esta Sala, *in re*, “*Granos y semillas S.R.L. c/Dirección General Impositiva*”, Expte. N.º 38212/2017, [sentencia](#) del 10/10/2017, que se encuentra [firme](#) y replicado en los autos “Zalesky, Juan José (TF 32829-I) c/D.G.I.”, Expte. N.º 3361/2024, sentencia del 1º/04/2025, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.

En efecto, allí fue señalado, con relación a una multa impuesta con base en la determinación realizada en el Impuesto al Valor Agregado, que: “[e]n múltiples oportunidades el Alto Tribunal reconoció el carácter penal de infracciones como la aquí cuestionada, característica que no se ve afectada por la existencia





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

de un interés fiscal accesorio en su percepción (arg. Fallos: 267:457; 287:76; 308:2043; entre otros).

En un supuesto análogo al de autos, en tanto que también se discutía la validez de la aplicación de una cláusula legal que disponía la suspensión de la prescripción frente a una multa, la Corte Suprema expuso que su aplicación al caso concreto, importaría juzgar al actor con base a una norma posterior más gravosa, con transgresión del principio constitucional que impide tal retroactividad (conf. art. 18 de la Constitución Nacional) y del principio general de la ley penal más benigna contenido en el artículo 2º del Código Penal (conf. Fallos: 287:76). Al respecto, aclaró que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes “ex post facto”- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados (Fallos: 197:569; 254:116; 287:76; entre otros).

En lo que aquí importa, esa situación se configura con relación a la sanción impuesta mediante la Resolución 93/12 (DV CRR1), ya que fue la suspensión del plazo establecida mediante el art. 44 de la Ley 26.476 la que mantuvo vivos los poderes del Fisco.

En ese sentido también se ha pronunciado la Sala V de esta Cámara, en los autos “Ulloa, Hernán Manuel (TF 29890-I) c/ DGI”, Expte. N° 36.119/2013 del 4 de octubre de 2016, oportunidad en la que señaló que, el principio penal indicado precedentemente -aplicable al ámbito sancionador- lleva a considerar que la aplicación de la Ley N.º 24.587 (que suspende el plazo de la prescripción en un sentido similar al establecido mediante el art. 44 de la Ley 26.476) importaría en el caso juzgar al actor con base en una norma posterior más gravosa, empeorando su situación frente al ilícito tributario (Fallos: 197:569; 254:116; 287:76; entre otros).

Como corolario, y por aplicación del principio de la ley penal más benigna, la suspensión dispuesta por la normativa citada no resulta aplicable, ya que importa agravar la situación del infractor, en consecuencia, se revoca en este aspecto el pronunciamiento apelado, y se declara la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para aplicar la sanción de multa por el Impuesto al Valor Agregado [...]” (ver Considerando XII, el subrayado no corresponde al original).

En estas condiciones, teniendo en cuenta que no se halla controvertido que la denuncia penal involucrada en la especie fue promovida el 16/11/10, que las sanciones aplicadas no se encuentran firmes (impidiendo la postergación del inicio del cómputo plazo invocada por el Fisco con sustento en el artículo 68,





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

inciso “a” de la L.P.T.) y la inaplicabilidad a la especie de la suspensión anual contenida por el artículo 44 de la ley 26.746 (en los términos que fue descripta anteriormente), es que cabe admitir el recurso de la contribuyente en este aspecto y declarar prescriptas las facultades del Fisco respecto de la multa aplicada por conducto de la Resolución N.º 51/2013 (Impuesto al Valor Agregado, periodos fiscales 01, 02, 07 y 12/2004).

IX.- Que, en tercer lugar, deben abordarse los agravios conectados con la actividad sancionatoria restante, que se encuentra fundada en los artículos 46 y 47, inciso “b”, de la L.P.T.

Aquí debe señalarse que, en rigor, el recurso de la parte demandada no se ajustó estrictamente a lo establecido en el artículo 265 del C.P.C.C.N., norma que resulta de aplicación al caso en atención a lo dispuesto por el artículo 91 de la ley 11.683 (t.o.1998 y modif.).

La circunstancia antes mencionada acota los alcances de la atribución revisora de esta Sala pues, cuando en el recurso se vuelca un discurso subjetivo, que se limita a reproducir mecánica y acríticamente la postura sostenida desde la presentación inicial y traduce un cuestionamiento formal e insuficiente del pronunciamiento recurrido, terminan quedando incólumes argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada, lo que impide su revocación (cfr. C.S.J.N. en *Fallos*: 333:1657, y Expte. A. 1003. XLIV “Alfacar S.A. s/concurso preventivo”, sentencia del 13/12/2011; asimismo, ver *Fallos*: 328: 645, entre otros).

El defecto apuntado merece reproche, si se tiene presente que esta Cámara ha preconizado reiteradamente que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado. Tal exigencia no se sustituye con una mera discrepancia con el criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. De ahí que se haya podido sostener que el respectivo memorial constituye un acto de petición, destinado específicamente a desvirtuar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal revisor.

A su vez, la exigencia concerniente a la crítica concreta se refiere a la precisión que implica señalar específicamente el agravio vertido, mientras que el requerimiento de que aquella sea razonada, alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, el cual debe demostrar en qué reside el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (cfr., en sentido concordante, Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, “Código Procesal Civil





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

y Comercial de la Nación, comentado y concordado”, T.I, Astrea, Buenos Aires, 1983, págs. 834/837; y esta Sala, *in re*, “Falk, Gerardo F.J. c/E.N.”, Expte. Nº 1291/05, del 13/03/2012, entre otros).

Por cierto, se ha sostenido reiteradamente que la operación de criticar es muy distinta a la de disentir. En efecto, la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo, con miras a demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. Por el contrario, disentir implica meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia, según ha tenido oportunidad de indicar esta Sala, tanto en su anterior integración, *in re*, “Contreras, Hugo S. c/J.E.M.G.E.”, sentencia del 29/03/2011 y sus citas, como en la actual, en autos: “Oro, Guillermo Alberto y otros c/E.N. -D.I.E.”, del 14/02/2012, entre otros.

Con una perspectiva afín a la descripta, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado que no alcanza para descalificar una sentencia el sostenimiento de una opinión diversa o alternativa a la expresada por el juzgador, de por sí insuficiente para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. *Fallos*: 305:1058; 306:598; 324:2460; 327:2168; 329:3979, entre otros en los cuales se descartó la tacha de arbitrariedad).

A la luz de estos principios, pesaba sobre la recurrente el deber de demostrar el error en el que habría incurrido el T.F.N., no pudiendo considerarse razonablemente que haya formulado una crítica seria de la resolución recurrida ante este Tribunal, por cuanto al proceder como se mencionó anteriormente no se hizo debido cargo de los fundamentos dados por el pronunciamiento apelado (cfr. esta Sala, *in re*, “Ramón S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 28.367/2019, sentencia del [5/03/2020](#)).

X.- Que, con respecto a las costas de la instancia de origen asignadas con motivo de la prescripción corresponde, en atención al modo en que se resuelve, adecuar la distribución efectuada en el Tribunal Fiscal de la Nación y disponer que las mismas se encuentren a cargo del Fisco Nacional (cfr. arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).

Por otro lado, y en lo que concierne a las costas de esta instancia, cabe disponer que, en atención al modo en que se resuelve, las mismas se encuentren en un 80% a cargo de la actora y en un 20% en cabeza de la demandada (cfr. arts. 68, segunda parte, 71 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

XI.- Que, previo a tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios, en atención al modo en que se resuelve, deberán regularse los emolumentos de los letrados de la parte actora, con el objeto de evitar un dispendio jurisdiccional. Oportunamente elévese la causa.

Como corolario de lo expuesto, este Tribunal **RESUELVE: 1º)** admitir parcialmente el recurso de la actora y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado con los alcances que surgen del Considerando VIII y confirmarlo en los términos de los Considerandos VII y IX; **2º)** disponer que las costas de la instancia de origen con motivo de la prescripción declarada se encuentren a cargo del Fisco Nacional (cfr. arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683); **3º)** distribuir los accesorios esta instancia en un 80% a cargo de la actora y en un 20% en cabeza de la demandada (cfr. arts. 68, segunda parte, 71 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683) y **4º)** hacer saber que no corresponde, en esta oportunidad, tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios, en los términos del Considerando XI.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

